

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se establecen las condiciones para la puesta a disposición de los datos de localización del usuario llamante del servicio telefónico móvil a los servicios de atención de llamadas de emergencia prestados a través de los números 062 y 091, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Según dispone el artículo 1.1 del proyecto, los operadores “pondrán a disposición de las autoridades prestadoras de los servicios de atención de llamadas de emergencia a través de los números 062 y 091 la información en tiempo real sobre la ubicación de procedencia de cada llamada dirigida a esos números”.

Dicha puesta a disposición supondrá la comunicación de los datos de carácter personal referentes a la localización del termina del abonado o usuario, debiendo la misma resultar conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Según dispone el artículo 11.1 de la Ley Orgánica “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el consentimiento no será preciso, conforme al artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que otorgue cobertura a la cesión.

El artículo 9 b) de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), dispone que “los Estados miembros velarán por que existan procedimientos transparentes que determinen la forma en que el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público podrá anular (...) la supresión de la presentación de la identificación de la línea de origen y el rechazo temporal o la ausencia de consentimiento de un abonado o un usuario para el tratamiento de los datos de localización, de manera selectiva por línea, para las entidades reconocidas por un Estado miembro para atender llamadas de urgencia, incluidos los cuerpos de policía, los servicios de ambulancias y los cuerpos de bomberos, para que puedan responder a tales llamadas”.

En relación con este punto, el apartado 36 de la Exposición de Motivos de la mencionada Directiva aclara que “Los Estados miembros podrán restringir el derecho a la intimidad de los usuarios y abonados por lo que se refiere a la identificación de la línea de origen en los casos en que ello sea necesario para rastrear llamadas malevolentes, y en lo tocante a la identificación y localización de dicha línea cuando sea preciso para que los servicios de socorro cumplan su cometido con la máxima eficacia posible. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar disposiciones específicas que permitan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ofrecer el acceso a la identificación y localización de la línea de origen sin el consentimiento previo de los usuarios o abonados de que se trate”.

En este sentido, el artículo 38.3 d) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, reconoce el derecho del abonado o usuario “a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento informado y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado”. No obstante, conforme al apartado 5 “Los usuarios finales no podrán ejercer los derechos reconocidos en los párrafos d) y f) del apartado 3 cuando se trate de llamadas efectuadas a entidades que presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen reglamentariamente, en especial a través del número 112”.

Asimismo, el artículo 70.4 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, aclara que “los operadores facilitarán los datos de localización distintos a los datos de tráfico a las entidades autorizadas para la atención de las de urgencia, cuando el destino de las llamadas corresponda a tales entidades”.

Como puede comprobarse de las disposiciones citadas se desprende la existencia de una habilitación legal para la comunicación de los datos de localización a las entidades prestadoras de servicios de emergencia. En este sentido, debe ponerse de manifiesto que el artículo 38.5 de la Ley 32/2003 no limita dicha posible cesión a las entidades prestadoras del servicio 112, sino que hace mención de dicho servicio “en especial”, sin perjuicio de la posible existencia de otros supuestos en los que la cesión de los datos pueda encontrarse habilitada por dicho precepto, siempre que la finalidad que justifica la comunicación pueda considerarse incluida en esa norma.

Pues bien, mediante resoluciones de 30 de octubre de 2001 y 21 de noviembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se identificó a los servicios prestados a través de los números 091 y 062 a los efectos previstos en el artículo 68.2 del

Reglamento aprobado por Real Decreto 424/2005, según el cual “Los datos referentes a los abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las guías accesibles al público únicamente se proporcionarán a las entidades titulares del servicio de atención de llamadas de emergencia. A estos efectos, se entenderá que los servicios de llamadas de emergencia son los prestados a través del número 112 y aquellos otros que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”.

Es decir, a través de la citada Resolución, debe considerarse que los supuestos objeto de regulación a través del Proyecto sometido a informe se refiere a entidades prestadoras de servicios de emergencia a los efectos previstos en el artículo 38.5 de la Ley 32/2003, lo que legitimaría la cesión a los mismos de los datos de localización en los términos previstos en el Proyecto sometido a informe.

En todo caso, debe recordarse que a comunicación legitimada por la Ley 32/2003 aparece vinculada a la prestación de servicios de urgencia, lo que legitimará la cesión en caso de prestación de dichos servicios y no en otros distintos, dado que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Esta limitación derivada del principio de proporcionalidad aparece expresamente reconocida por el Proyecto sometido a informe, cuyo artículo 3 ampara la cesión en la protección del interés vital del llamante y del interesado, quedando limitada a una más efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de emergencia” y disponiendo igualmente que los datos “se utilizarán exclusivamente para la prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia, no pudiéndose utilizar para otros fines ni cederse a terceros”.

A la vista de todo ello, procede informar favorablemente el Proyecto sometido al parecer de esta Agencia.